

Movimiento ecologista en el año 2004

Ladislao Martínez López

En el ámbito internacional, 2004 fue un año con importantes eventos connotable repercusión sobre el medio ambiente. A destacar entre ellos que, finalmente, el protocolo de Kioto entrará en vigor, casi 8 años después de su firma, al haber sido ratificado por más de 55 países que representan más del 55% de las emisiones mundiales. Tras la retirada de EE UU y Australia y la ratificación del resto de gran-des países industriales (UE, Japón, Canadá y países del antiguo bloque soviético), todo dependía de la deci-sión de Rusia, sin cuyo concurso era imposible alcanzar el 55 % de emisio-nes. Tras largos titubeos, a mediados de 2004, Rusia inició el largo proceso de ratificación^[2] recientemente concluido.

Este protocolo es el resultado de unas largas negociaciones y contempla una reducción de las emisiones totales de los gases de invernadero de los países industrializados del 5,2% tomando como base de partida las correspondientes al año 1990. Se trata de un tímido e insuficiente paso en la dirección adecuada, aunque su eficacia ambiental se ha visto reducida muy considerablemente por la introducción de vías para que los países puedan apuntarse reduc-ciones que no se realizan en su territorio. Nos referimos a los llamados «me-canismos de flexibilidad»: el comercio de emisiones, que es la compra directa de cuotas de CO₂; y los que significan insultos ultranacionalistas, votaron contra el protocolo, empleando, por cierto, una suerte de ar-gumentos difícilmente distinguibles de los de Bush. Tras la entrega del documento oficial de ratificación deben transcurrir tres meses hasta la entrada en vigor del acuerdo. Esto explica por qué, aunque se sabe desde 2004, hay que esperar hasta el año siguiente para ser efectivo. Hasta febrero de 2005. versiones en terceros países para que estos emitan menos: el mecanismo de desarrollo limpio y la aplicación conjunta.^[3]

2004 fue un año en el que los huraca-nes se manifestaron de forma especial-mente virulenta en el Caribe, golpeando duramente a países como Haití (a los que los medios de comunicación dedicaron más atención de la habitual en nuestro país debido a la presencia de tropas españolas), pero también a zonas de EE UU. Los expertos consideran nor-mal que cíclicamente se produzcan años con una inusitada actividad de huraca-nes, pero relacionan el incremento en su número y la especial virulencia con que se producen con el cambio climático. También se hizo público el hecho de que la concentración atmosférica de CO₂ no sólo no disminuye, sino que aumenta a una velocidad doble de la hasta ahora registrada. En resumen, el cambio cli-mático se está acelerando.

Pese a ello la cumbre de Buenos Ai-res sobre cambio climático, en la que ya se conocía la ratificación de Rusia, y por tanto la pronta entrada en vigor del pro-tocolo, fue un nuevo fracaso debido so-bre todo a la tarea de obstaculización de Arabia Saudita (que pretendía compen-saciones

económicas para los países productores de petróleo por la reducción de sus ventas) y de EE UU con un Gobierno de Bush fortalecido por las urnas. Quedó claro así que la administración norteamericana, no sólo no cambiaba de posición, sino que además no cumplía su palabra de no interferir en el protocolo del que se habían descolgado en el primer mandato.

A resaltar que los demás agentes internacionales tampoco dieron grandes sorpresas, la UE apareció como el bloque económico más interesado en avanzar en el desarrollo del protocolo^[4] y se volvió a evidenciar las diferencias entre los países menos desarrollados. Discreta fue la actuación de India y China que más bien se alinearon con el furgón de cola de los países que no querían conferencias ulteriores que definieran objetivos para más allá de 2012 por temor a interferir su dinámico crecimiento económico. Como resulta habitual, señalan que ellos no son responsables del cambio climático, ya que ni sus emisiones actuales ni las históricas alcanzan la media mundial, pero fingen ignorar que sus emisiones totales (debido a su tremendo peso demográfico) ya representan un problema innegable. A su vez sirven de pretexto a los países renuentes (como EE UU) para evitar comprometerse con el problema aduciendo que sin su concurso es poco lo que puede hacerse. Decepcionante fue también la actitud de Brasil, ya que pese a la presidencia de Lula, adoptó una posición similar a la de China e India contribuyendo a hacer un poco más difícil la solución.

El resultado neto es una conferencia en la que, no sólo no se avanzó en preparar un escenario post-Kioto, sino que no se contempla una conferencia en 2005 que permita avanzar de forma efectiva.

También en 2004 se popularizó entre los expertos el debate sobre «el fin de la era del petróleo barato». No se habla ahora de agotamiento, como se hacía en la década de los setenta, sino de proximidad a la tasa de extracción máxima. Hasta ahora una demanda prácticamente siempre en aumento de petróleo era atendida por una oferta que aumentaba también. Pero eso implicaba que las reservas iban reduciéndose. Desde 1976 no se han descubierto yacimientos gigantescos, y los hallazgos de los grandes tienden a cero. En 2000 se descubrieron 16,8 en 2001, 3 en 2002 y ninguno en 2003.^[5] Muy significativamente entre 2003-4 todos los países de la OPEP, tras un anuncio de reducir las cuotas,^[6] incrementaron su producción en varias ocasiones y desde la mitad del 2004 se anuló el sistema de cuotas. En su última reunión del año se volvió a restablecer, pero a unos niveles tan altos que no cabe hablar propiamente de cuotas limitadas, sino de normalización de producciones máximas. Todos los países producían al máximo de sus capacidades pero casi nadie tenía capacidad de aumentar su oferta. Se han comentado como factores explicativos del fracaso de la ocupación de Iraq, de la crisis de Venezuela, de la inestabilidad de Nigeria, del anuncio de una huelga en Noruega, de la crisis de Yukos^[7] e incluso de los huracanes del Caribe. Todos estos factores han tenido alguna importancia puntual salvo el primero, que ha persistido en el tiempo. Pero empieza a haber consenso en que sólo Arabia Saudita y sobre todo Iraq (si se estabiliza la situación) tendrían capacidad de aumentar significativamente su producción. Puede haber países que produzcan más (se habla de Libia, Angola, Guinea Ecuatorial e incluso de Sudán) pero en otros continúa el declive de la extracción (El Mar del Norte, México, Ecuador,

China, Rumania....) que se da prácticamente en la misma proporción. Alan Greenspan (secretario de Estado del Tesoro de EE UU) ha reconocido que no puede atenderse la demanda mundial de crudos ligeros.[8] Resulta obvio que si la demanda intentara seguir creciendo y no pudiera ser atendida por la oferta, provocaría una escalada de precios.

Ya existe consenso entre los expertos e instituciones en que se alcanzará el pico de extracción. La discusión es cuando. El Departamento de Energía de EE UU hace las previsiones más optimistas y lo sitúa en 2037, pero la muy optimista Agencia Internacional de la Energía lo sitúa en algún lugar entre 2010-20, siempre que las previsiones antes citadas resulten demasiado infladas. En el lado pesimista, la activísima y bien documentada ASOI (Asociation for the Study of Peak Oil [9] colectivo que agrupa a antiguos ejecutivos del sector petrolero y expertos universitarios) lo situó en 2010, aunque a la vista del aumento de la demanda lo colocó en 2006. Bakthiari, director de planificación de la compañía petrolífera iraní lo sitúa en 2007 y Simmons, miembro de la Comisión de energía de EE UU y dueño de una importante sociedad de inversión en energía dice que se puede producir en cualquier momento. Shell anunció, en medio de un fuerte escándalo que removió su dirección, una reducción en sus reservas del 22%. Fue seguida de otras pequeñas compañías que hicieron lo mismo.

Este hecho va acompañado de una concentración de las reservas petroleras en los países de la OPEP. Si como es previsible, la administración Bush (con estrecha relación con las compañías energéticas) disponía de información del previsible fin de la era del petróleo barato, la guerra de Iraq tendría una clave adicional de explicación. No es sólo que se accediera a importantes reservas petroleras, es que se tenía la llave del país que más capacidad de elevar su producción tiene (junto a la ya citada Arabia), con lo cual se puede controlar la evolución de los precios internacionales a conveniencia. También esto hace más comprensible la inusitada resistencia a la guerra de algunos países de la UE (significativamente Francia y Alemania), que temían dejar en manos de su aliado/competidor un factor determinante como el precio del petróleo. Nada de esto invalida la importancia de las motivaciones políticas.

Para los países consumidores el grave problema del posible encarecimiento del petróleo es la total dependencia que de esta fuente energética tiene el transporte. La situación es tanto más grave cuanto que en una sociedad globalizada, con elevado nivel técnico y fuerte integración de los mercados, el transporte (tanto de personas como de mercancías) es un sector decisivo. Su tasa de crecimiento en los países industrializados dobla a la del PIB en término medio... Y no existe alternativa clara a corto plazo. Creo por tanto que este hecho, poco conocido por la opinión pública, es de los más relevantes ocurrido en el año 2004.

En el marco estatal español, si durante 2003, se produjeron importantes luchas ecologistas, durante 2004 se materializaron algunas victorias producto de esas luchas. Algunas de ellas son el resultado inmediato del cambio electoral ocurrido en nuestro país. En todos los anuarios sobre movimientos sociales en nuestro país en que he participado, he situado la lucha contra el trasvase del Ebro como una de las más significativas del movimiento ecologista.

O mejor dicho, una lucha en la que el ecologismo se ha trascendido ampliamente a sí mismo confluendo con un amplio movimiento social en el que se daban cita intereses económicos (el futuro de muchas actividades económicas estaba en entredicho en zonas como el delta del Ebro), identidades nacionales, defensa del territorio... para configurar uno de los movimientos sociales más importantes y duraderos de los últimos años.

Pues bien, el gobierno del PSOE convirtió el abandono del trasvase en una de sus señas de identidad política y con notable celeridad cumplió su promesa electoral, refrendada después en el debate de investidura, de paralizarlo. No debe pasarse por alto la significación de este gesto. Si, por ejemplo, la retirada de las tropas en Iraq (el gesto político más descollante del nuevo talante de Zapatero) era una demanda social muy extendida, no resultaba tan claro el asunto en lo relativo al trasvase. En algunas zonas (Almería, zonas del País Valenciano y muy especialmente Murcia) el trasvase es una demanda social muy arraigada,^[10] del mismo modo que en otras (Cataluña y Aragón) el rechazo era muy amplio. Una encuesta del CIS publicada poco después del cambio de gobierno, señalaba que eran más los ciudadanos partidarios del trasvase que los contrarios al mismo. Muy significativamente el diario El Mundo, en un co-comentario editorial que siguió a la publicación de esta encuesta, instaba al PP a ejercer una oposición inteligente, abandonando temas como la participación de nuestro país en la guerra de Iraq, reconociendo errores en la gestión previa y posterior de los atentados del 11-M y focalizándose en asuntos como el PHN, que eran «entendidos por la mayoría de la ciudadanía».

Es obvio que Zapatero tenía que dar satisfacción a sus electores y respetar los equilibrios de poder del PSOE (entre sus apoyos de siempre estaban el PSC y el PS de Aragón, ambos firmemente comprometidos en la lucha antitransvase, y el primero gestionando un difícil gobierno tripartito en que las otras dos patas —ERC e IC— exigían contrapartidas a sus renuncias en otros campos), pero desde luego la firmeza demostrada no debe pasarse por alto ni minusvalorarse. Tanto en el gobierno (en el que la ministra Cristina Narbona se ha mantenido muy firme) como en la oposición del PP no se da la batalla por terminada. Así, se ha presentado un nuevo plan de atender las demandas de agua del Levante so-bre todo a base de desalación, orientando los fondos de la UE hacia este fin, al tiempo que se intenta revertir aceleradamente el proceso expropiatorio necesario para el trasvase. Por el contrario los gobiernos regionales del PP utilizan es-trategias para mantener bajo dominio público los terrenos afectados por expropiaciones o imponen tasas sobre los vertidos de las desaladoras (en Murcia) con el objetivo de dificultar la creación de situaciones de hecho que imposibiliten o hagan innecesario el trasvase.

Para el ecologismo, lo ocurrido es también una situación ideal para reflexionar sobre los logros posibles de un movimiento social amplio y los límites de la propuesta programática del PSOE en el gobierno. La ministra (con diferencia la persona más próxima al ecologismo de todos los gobiernos que se han sucedido en este país) ha dirigido su discurso a los sectores sociales «más afectados» por la supresión del trasvase comprometiéndose a ofrecerles «más agua, más rápido y más barata» por mecanismos alternativos (sobre todo desalación, pero también reutilización y reducción de pérdidas en la red). Dejando a un lado si todo ello es simultáneamente posible, la alternativa

supone aceptar que el déficit de agua existe y debe ser atendido sin ninguna reflexión sobre la insostenibilidad del modelo de agricultura y urbanismo vigente en el sureste de la península. Se olvida que la superficie agrícola ha crecido desmesuradamente en zonas como Murcia y Almería, en muchas ocasiones bajo plástico de invernaderos, con un consumo desmesurado de pesticidas, herbicidas, abonos y otros inputs energéticos. Ciertamente con un gran rendimiento económico, pero con un impacto ambiental inasumible. Apostar por ofrecerles agua es acabar con el factor limitante crítico y con ello mantener las tendencias estructurales de insostenibilidad. No debe tampoco olvidarse que desalar agua es consumir más energía y con ello aumentar el impacto ambiental en su producción y transformación,^[11] al tiempo que lo producen (sobre todo si no se adoptan buenas soluciones técnicas) impactos locales significativos en el vertido de la salmuera. Los responsables del PP del Gobierno Murciano se han acogido —cínicamente— a estos impactos para establecer el canon antes indicado. Pero no por ello dejan de tener algo de razón.

Sobre todo la desalación, con sus impactos ambientales lejanos e invisibles, tiene el problema de sugerir que puede obtenerse una cantidad infinita de agua sin problemas manteniendo un modelo agrícola-urbanístico insostenible. En la actualidad el movimiento ecologista organizado, que valora muy positivamente el abandono del trasvase, discute la posición a adoptar sobre la desalación vista como un mal menor asumible por algunos y como un grave problema futuro por otros.

Creo que vale la pena volver sobre un comentario realizado en este mismo anuario el año pasado. En él valoraba críticamente la táctica desplegada por el movimiento antitransvase para «intentar detener la llegada de fondos de la UE para hacer imposible el proyecto». Seguía después afirmando que «los impulsores de la movilización en Aragón y en el delta diseñaron una estrategia (la embajada azul con un camión ante las instituciones de la UE, el abrazo a las mismas, el empleo de los símbolos de la UE...) que resultó dura de tragar para los sectores en la movilización más críticos con la UE (como Ecologistas en Acción que en ese momento discutía su más que previsible rechazo a la constitución europea)». Preveía además que «todo apunta a que finalmente la UE destinará fondos al proyecto». Me basaba para hacer esta afirmación en el comentario realizado por la entonces comisaria de Medio Ambiente a varias organizaciones ecologistas, en el que manifestaba que, pese a su acuerdo con las posiciones críticas con el PHN entonces existentes, no había ninguna opción de evitar el envío de fondos comunitarios si el gobierno español mantenía su presión. Se manifestó dispuesta a retrasar en lo posible el envío de los fondos, pero nos advirtió que ahí terminaban sus opciones. En mi opinión sigue siendo claro que esa táctica resultó equivocada y que la paralización del trasvase vino por el único camino que siempre probó su eficacia: el de la lucha político-social en nuestro país.

Encuentro muchas similitudes entre la paralización del PHN y la moratoria nuclear decretada por el gobierno del PSOE en 1984. En ambos casos se ha dado satisfacción a una demanda de los sectores progresistas de la sociedad, expresada a través de importantes movilizaciones, al tiempo que se ha intentado no dañar los intereses económicos de las grandes compañías. En el

PHN se busca resarcir a las posibles constructoras del trasvase ofreciéndoles en su lugar el negocio de las desaladoras, del mismo modo que a los propietarios de los activos en moratoria se les reconocieron derechos por las inversiones realizadas.

Otro de los cambios ocurridos con el nuevo gobierno ha sido la redacción del Plan de Asignación de Derechos de Emisión de los sectores industriales. El plan viene impuesto por una Directiva Comunitaria del mismo nombre que se concibió como un instrumento complementario para que la UE cumpliera con los compromisos derivados del protocolo de Kioto. La idea subyacente es que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en aquellos sectores industriales en que resulte más barato hacerlo. Para ello, lejos de forzar una actuación de vigilancia de organismos estatales, se confía en los «mecanismos de mercado», permitiendo a los agentes económicos comprar y vender emisiones a precios fijados por la oferta y la demanda. En los planes están incluidos casi todos los sectores industriales (salvo los muy abiertos a la competencia internacional), pero no el sector trans-porte o el residencial. El Estado se limita a asignar los Derechos de Emisión a los agentes económicos, a vigilar por su adecuado funcionamiento y a sancionarlos incumplimientos. El mercado funcionará a escala europea aunque son los gobiernos los responsables de confeccionar los planes nacionales con la supervisión posterior de la UE.

Excede con mucho las pretensiones de estas páginas la, por otra parte muy interesante discusión de la conveniencia y eficacia de los mercados en la prevención del cambio climático, pero conviene precisar que no son ni de lejos los únicos mecanismos previstos para cumplir los compromisos de Kioto^[12] y resaltar que, antes de dicho Plan, era prácticamente nada lo que se había hecho para limitar emisiones en nuestro país.^[13] Hasta el último momento, el gobierno del PP y los sectores económicos hipotéticamente afectados, confiaban en que el entramado de Kioto se viniera abajo, con la no ratificación rusa del protocolo, y que ello les libraba de realizar ningún esfuerzo. La comisaria Loyola de Palacio pedía una relajación de las exigencias de la Directiva Comunitaria, sólo unos días antes de que Putin hiciera pública su intención de ratificar. No sorprende por tanto que una vez redactado el Plan todo el sector industrial, con la CEOE a la cabeza presentara un informe catastrofista previendo la crisis del sector industrial si el Plan seguía adelante. Es de resaltar también que Iberdrola y Gas Natural se mantuvieron al margen y aún enfrente de estas posiciones, poco importa que fuera por intereses empresariales.

Lo cierto es que el Plan fue un tímido paso adelante, que tenía más valor como gesto de que el nuevo gobierno no seguía el camino del anterior de ignorar los problemas del cambio climático, que como concreción práctica de un giro sustancial. De hecho las emisiones contempladas en el Plan prácticamente son iguales en 2007 que en 2002. A su vez en 2002 eran un 40% más que en el año base de 1990. Las reducciones deberán producirse posteriormente en la etapa 2008-12.

A finales del año el gobierno presentó el Plan de Infraestructuras de Transporte, conocido, cuando se redactan estas notas, sólo por referencias periodísticas.

En él se prevé pasar en los próximos 15 años, de los más de 9.000 km. actuales de autovías y autopistas, hasta los 15.000. La red de ferrocarril de altas prestaciones (término este que no se ha precisado si se refiere a lo que en la actualidad se llama Alta Velocidad) se multiplicará casi por 10, pasando de los 1.030 km. actuales a 10.000 y sirviendo, no sólo para el transporte de pasajeros sino también de mercancías. Este último dato ha sido presentado como una gran novedad ya que se insiste en que se cambia la tendencia actual y el ferrocarril pasará a llevarse el grueso de la inversión pública con casi el 50% del presupuesto total. Por encima de la inversión destinada a carreteras que había sido hasta ahora la parte del león de la inversión en transporte. Se ha insistido también en que el 40% de la inversión será privada.

Es preciso esperar un poco para hacer una valoración más ajustada de lo que el citado Plan puede querer decir, pero causa enorme preocupación que se siga insistiendo en la idea de un inexistente «déficit» de infraestructuras de transporte, sobre todo por carretera. Ignorando que el ritmo de construcción de las vías de alta capacidad ha sido de los más altos del mundo, y que cualquier ratio indicador (km. de autovía por habitante, km. de autovía por superficie,...) es significativamente mayor que la media de la UE. Seguir cultivando la idea de «necesidad» o de «déficit» es algo tan popular como falso. Del mismo modo, aunque el ferrocarril es uno de los modos de transporte más respetuosos con el medio, si se habla de «Alta Velocidad» en el sentido actual, todas las ventajas se difuminan: las tremendas exigencias técnicas necesarias para asegurar dichas velocidades (pendientes pequeñísimas y radios de curvatura muy grandes) obligan a grandes movimientos de tierras y profundas huellas en el territorio en el momento de la construcción, y a elevadísimos consumos energéticos por pasajero o por kg de mercancía durante el funcionamiento.

En el lado de las luchas, estas han sido mucho más modestas y menos acompañadas de grandes movilizaciones que en años anteriores. Entre las más destacadas cabe indicar las movilizaciones contra las centrales de gas en ciclo combinado que se han producido en distintos puntos del país. De ellas ya hablamos un poco en los dos años anteriores y ya puede empezar a trazarse un balance de resultados. Decíamos el año pasado que: «las luchas más intensas se están librando contra proyectos que se iniciaron hace algunos años. Es el caso de Amorebieta, Arcos de la Frontera, Catadau o Morata de Tajuña... Así por ejemplo en Arcos el gobierno del PP que apoyaba sin fisuras el proyecto per-dió estrepitosamente las elecciones ante una coalición PSOE-IU que se opone al proyecto. Cuando se redactan estas notas sigue esperándose que el gobierno municipal se decida a paralizar las obras que están ya en torno al 20/30% del proyecto total». Nos referíamos a los primeros 800 MW previstos del total de 1.600.

Hoy sabemos lo que pasó. Iberdrola continuó la construcción de la planta, en el equipo de gobierno municipal aparecieron las divisiones, la alcaldesa del PSOE al no poder arrastrar a su partido en Andalucía consideró la lucha perdida y se conformó con negociar condiciones más ventajosas para el funcionamiento de la planta, la plataforma ciudadana perdió apoyo popular, la concejala de IU decidió continuar la lucha intentado paralizar la planta ya en fase de pruebas, pero fue destituida. En definitiva, la planta está a punto de empezar su explotación comercial en sus primeros 800 MW. Otro tanto ocurrió con la de

Amorebieta, que también se ha empezado a explotar.

Mejor suerte corrieron las peleas contra Morata y Catadau, que todavía no han recibido ni siquiera la Declaración de Impacto Ambiental positiva y que subsiguientemente no disponen de Derechos de Emisión asignados en el Plan a que ya aludimos. En el caso de Morata, además, el Ayuntamiento sigue negándose a permutar con la empresa alguno de los terrenos en los que debe instalarse, por lo que la planta carece hasta de lugar en el que ubicarse, y además en parte de estos terrenos se está explotando una extracción de áridos que está alterando ostensiblemente el suelo. En cualquier caso, entre rumores de que se ha paralizado la tramitación de los más de 70 expedientes de centrales de gas en ciclo combinado presentados en el sistema peninsular, 8 proyectos de centrales de este tipo se tramitan en la Comunidad de Madrid. 17.000 MW de estos proyectos disponen de asignación individual de derechos de emisión.^[14]

Otra lucha de interés es la que libra-ron los vecinos de San Roque (Cádiz) contra la contaminación del aire en la zona en la que se ubican, en pocos kilómetros, la refinería de CEPSA, la siderur-gia de ACERINOX (donde se produjo la fusión de una fuente radiactiva hace unos años que provocó una importante con-taminación) y las centrales de genera-ción de electricidad de Bahía de Algeciras, de San Roque y los Barrios (con una potencia eléctrica total de más de 2.000 MW), entre otras industrias pesadas. Ante la increíble pretensión de la Junta de Andalucía de que la calidad del aire cumplía todos los requisitos legales, impulsados por el grupo local de Ecologistas en Acción y el Grupo por la Defensa del Medio Ambiente de Gibraltar, y con el lema «en defensa del medio ambiente y la salud», más de 4.000 personas salieron a la calle el 23 de octubre. La manifestación fue una tremenda sorpresa por el grado de seguimiento que alcanzó, pese al silencio a que fue sometido por los medios de prensa, y porque entre los manifestantes concurren muchos trabajadores de las instalaciones criticadas. En su doble condición de asalariados y afectados, muchos de ellos desoyeron a muchos cuadros sindicales que repetían el mantra de la pérdida de puestos de tra-bajo, y salieron a la calle. Una de las consecuencias de esta movilización es que en el Plan General de Ordenación Urbana de San Roque desestima la instala-ción de nuevas empresas contaminantes en el término municipal.

Pero, a mi juicio, dos de las luchas más importantes del año tienen como protagonista al, tan interesante como desconocido, moviendo ecologista canario.^[15] El primero de ellos es el de Granadilla.

El gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, dependiente en última instancia del Ministerio de Fomento pretenden hacer un macropuerto industrial en la costa de Granadilla (sur de Tenerife) y a la vez dismantelar el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. La futura construcción de este puerto industrial en Granadilla se ha convertido en otro atropello, donde un sector importante de ciudadanía cree que se ha rebasado el límite de lo tolerable en la especulación con el territorio en Tenerife. En este sentido esta lucha se ha convertido en un símbolo.

A grandes rasgos proyecto supondría: a) La desaparición de 6 km. de las mejores playas naturales de la isla, b) La contaminación de las aguas de toda

la zona sur de la isla, c) La desaparición de un ecosistema marino (Sedabales del Sur), protegido por la Unión Europea y uno de los ecosistemas marinos más importantes de Canarias d) un grave perjuicio para el sector pesquero artesanal, e) incremento del transporte de mercancías pesadas y peligrosas (más de 2.000 camiones/día) en la autopista TF-1.

Pero la especulación parece superar las barreras legales y directivas ambientales europeas, ya que sus promotores cuentan con el beneplácito del Ministerio de Medio Ambiente, que califica el proyecto como «ambientalmente viable» en la preceptiva declaración de Impacto Ambiental, con la omisión de informes desfavorables de dos de sus direcciones generales: la de Costas y la de Conservación de la Naturaleza.

El puerto de la capital cubre sobradamente las necesidades de la isla, está perfectamente integrado en la ciudad e infrautilizado, no funcionando al 100% de su capacidad. ¿Por qué era necesario otro puerto en el sur?

Al mismo tiempo, se habla de trasladar la refinería al polígono industrial de Granadilla, lo que agravará la saturación de la autopista, debido al transporte de mercancías entre el puerto y los polígonos industriales.

Frente a ello, los dos hitos más importantes realizados en defensa de este espacio por los ciudadanos y el movimiento ecologista han sido en 2004: A) recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) autonómica. La Plataforma contra el Puerto de Granadilla ha logrado recoger casi 60.000 firmas en todo el archipiélago (aunque su mayoría en Tenerife). Se han recogido estas firmas a través de una ILP, que una vez presentada al Parlamento debe ser tomada en consideración y debatida en el mismo. En ella se aboga porque una gran extensión del litoral de Granadilla que se quiere destruir con este Puerto innecesario sea espacio natural protegido. En este momento se está esperando noticias de los trámites a seguir por el Parlamento. B) Manifestación el 27 de noviembre. La Asamblea por Tenerife, creada por más de 60 colectivos ciudadanos en respuesta a la ofensiva política empresarial contra el territorio se creó en junio de 2004 en defensa del medio ambiente en Tenerife, convocando una Manifestación contra el puerto y contra la especulación a la que acudieron en torno a 80.000 personas.

En este tema hay un dato importante, todo el arco parlamentario en Canarias y en el Cabildo de Tenerife han estado a favor del proyecto, aunque el PSOE disimula diciendo que se van a tomar medidas de protección ambiental y alguna excusa más, pero es curioso como en una lucha de este calibre el movimiento ecologista se ha quedado sólo y ha logrado esta movilización ciudadana.^[16]

El otro conflicto es el del «Frente Marítimo». El Ayuntamiento de Las Palmas de GC, el Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, dependiente en última instancia del Ministerio de Fomento, pretenden hacer proyecto urbanístico en una zona del puerto en desuso. Todas estas instituciones están en manos de dirigentes del Partido Popular.

Se ha generado un gran debate en la ciudad sobre el futuro de su litoral, o sea de su frente marítimo, ya que el ayuntamiento sólo piensa en la generación de

nuevos rascacielos y centros comerciales, en cambio se ha abierto un gran debate de que se está (con la crisis del puerto) ante una oportunidad histórica de regenerar el litoral de la ciudad.

En este debate tuvo un gran protagonismo Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias desde el inicio, aunque después se creó una plataforma, donde están los sindicatos, algunos pequeños empresarios, artistas e intelectuales (Universidad) y el Colegio de arquitectos (muy importantes estos últimos ya que han cualificado el debate).

A grandes rasgos, las demandas ecologistas son: 1) Que las instituciones fomenten la participación ciudadana para que se abra un gran debate sobre el Frente Marítimo. 2) Que se entienda como un espacio integral que recorre todo el litoral de la ciudad, desde la playa de la Laja a la de Las Canteras, incluyendo La Isleta y el Confital. 3) Que se potencie el valor estratégico del Frente Marítimo como espacio público de esparcimiento, convocándose para tal fin un concurso internacional de ideas que sea valorado, con representación ciudadana, por un jurado internacional. 4) Que las instituciones competentes (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y Autoridad Portuaria de Las Palmas) actúen de forma coordinada en el proyecto integral. 5) Que se paralicen de manera inmediata los proyectos de obras que hay, así como el resto de obras de la Autoridad Portuaria que afectan al litoral de la ciudad (Alcaravaneras, muelle deportivo, etc.). 6) Que en estos cuatro años de gobierno el proyecto integral del Frente Marítimo sea un bien ya incorporado a la vida de Las Palmas de Gran Canaria.

Para lograr tal fin el ecologismo recoge unas 9.000 firmas que son presentadas ante las instituciones competentes y se convoca una manifestación el 13 de noviembre a la que asisten unas 10.000 personas.

La importancia de este conflicto es que se trata de una lucha exclusivamente de ecología urbana y contra la especulación, no hay «nada que salvar», en el lugar donde está proyectado ahora mismo hay unas naves abandonadas. En este sentido es una lucha casi única, reservada por ello para el fin de estas largas notas.

[1] Miembro de Ecologistas en Acción.

[2] Este proceso exigía el apoyo del gobierno el voto favorable de la Duma y del Senado, la firma del presidente Putin y la entrega del instrumento de ratificación. Un hecho destacable es que el Partido Comunista de Rusia, junto a

[3] Si se tiene en cuenta, la retirada de EE UU del protocolo, los mecanismos de flexibilidad y los sumideros incorporados y la evolución de las emisiones en los países menos industrializados, casi con seguridad, en el año 2012, las emisiones mundiales serán mayores que en 1990, aunque todos los países comprometidos hayan cumplido sus compromisos. Pese a todo el ruido organizado no se habrá avanzado nada.

[4] Aunque en su seno aparecían gobiernos interesados en «repescar a los EE UU», aunque esto significara rebajar aún más el acuerdo y otros más firmes en su compromiso ambiental. Por primera vez el gobierno español estuvo entre los segundos, a pesar de reconocer que heredaba una difícil situación del anterior.

[5] Estos datos han sido aportados por Roberto Bermejo, profesor de la UPV y miembro de Bakeaz.

[6] Las reducciones anunciadas prácticamente nunca se cumplen y la producción real de la

[7] La adquisición del grueso de los activos de producción de Yukos por la estatal Rosneft a final del año es un intento de Putin, no sólo de acabar con un rival político, sino de controlar el ritmo de flujo de petróleo.

[8] Son los crudos que con un proceso simple de destilación aportan gran cantidad de productos ligeros (gasolina y gasoil) de mucho valor añadido. Los crudos pesados con el mismo proceso rinden mucha mayor proporción de fuel-oil pesado. Estos segundos tienen menor valor que los primeros. Su web es www.asponews.org. A finales de año (El País 29-12) Arabia Saudí notificó que invertiría para aumentar su producción hasta 12 millones de barriles día e indicó que sus reservas podrían ser de 461 miles de millones de barriles (200 mil millones más que las reconocidas), pero estas cifras se sitúan dentro de las previsiones de aspo.

[9] opep ha sido tradicionalmente superior a la acordada.

[10] En un clima general de retroceso del PP en las últimas elecciones generales, los resultados de Murcia no pueden pasarse por alto. Aumentó su respaldo electoral haciendo pivotar su discurso sobre el trasvase y eclipsando otros temas como la guerra, el atentado del 11-M...

[11] La idea de producir la energía con fuentes renovables no es imposible pero sólo (¡y no es poco!) quiere decir que no se aumentará por tal fin las emisiones de gases de efecto invernadero ni se producirán otras afecciones (lluvia ácida, generación de residuos radiactivos, minería a cielo abierto...). No que no habrá impacto ambiental porque toda generación de energía tiene algún impacto. La propuesta más razonable, en el actual nivel tecnológico, para alcanzar en el período establecido la producción energética necesaria debería pasar por aumentar los planes de instalación de energía eólica con aportaciones menores de otras fuentes renovables. Pero además de generar la energía debería transportarse a los centros de consumo (no sopla el viento donde se necesitan las desaladoras) con la necesidad de hacer crecer las redes de transporte y distribución de electricidad... y con sus consiguientes impactos.

[12] Existe una amplia gama de políticas para limitar emisiones: intervención administrativa potenciando ciertas energías, limitando la presencia de equipos poco eficientes, controles de uso, limitaciones de velocidad de circulación, impulso de ciertos modos de transporte, ejemplaridad de las administraciones. De hecho los países europeos que habían mostrado una mayor sensibilidad ante el cambio climático ya tenían casi alcanzados sus objetivos de reducción antes de redactar estos planes. Es el caso del Reino Unido y de Alemania.

[13] En los anteriores anuarios comenté los resultados de la aprobación de los sucesivos planes y programas de los gobiernos del PP (de fomento de las energías renovables, de infraestructuras de electricidad y gas y por último de ahorro y eficiencia). De todos ellos resultaba que: «A consecuencia de ello las emisiones de gases de efecto invernadero de origen energético se incrementarán en el período 1990-2012 en un 58%, lo que hace casi imposible cumplir con los acuerdos a que se comprometió el gobierno en Kioto».

[14] El PP en su Plan de Infraestructuras de Gas y Electricidad, consideró necesarios 14.800 mw de estas centrales antes del año 2011.

[15] Toda la información que sigue se la debo a Heriberto, un compañero ecologista canario que me describió detalladamente cuanto sigue.

[16] Más información: <http://www.benmagec.org/ISLAS/TENERIFE/granadilla.html>.